

El debate del agua y los intereses organizados.

Francisco Javier Martínez Gil, Departamento de Geodinámica, Universidad de Zaragoza.

Tras la reciente aprobación por el Consejo de Ministros del proyecto de Plan Hidrológico Nacional, el famoso "paseo militar" ha empezado su marcha triunfal. En 1995, el hoy Presidente José M^a Aznar era oposición, y prometía entonces la creación de un Ministerio de Medio Ambiente en el que el agua habría de ser protagonista especial y lo medioambiental un activo social. Quería construir un país habitable, atractivo, y no de supervivencia; un país de respeto profundo a los valores escénicos, culturales y simbólicos del territorio, con sus paisajes, sus horizontes, sus costas y sus ríos, porque configuran nuestra singular personalidad (decía). Proclamó el derecho de las gentes a seguir viviendo en el territorio que han ocupado y conservado durante siglos.



Lejos quedan los días de la recién conquistada segunda legislatura, cuando nos prometió que habría de ser la legislatura del diálogo. Pero hoy, como ayer, nuestro Presidente parece no conocer más diálogo -en este tema, al menos-, que los insondables contenidos de su "libreta azul", que a saber quién los escribe. El prometido Ministerio de Medio Ambiente ha sido desde el primer momento una estafa social.

Para la comunidad científica especializada que se ha manifestado unánimemente en contra de este Plan, el debate del agua ha sido una tomadura de pelo, y cree que es una huida hacia adelante, que en vez de arreglar las cosas las va a enredar todavía más. La demagogia y los intereses organizados han sido sus dos grandes musas. El Plan elude el nudo gordiano de la situación: la reforma profunda de la Administración hidrológica.

No se puede entender que el Presidente Aznar haya convocado solemnemente a los regantes para pedirles apoyo al Plan y que no haya hecho lo propio con la comunidad científica, que ha solicitado ese encuentro en varias ocasiones. Un país y un gobierno que desprecian el saber científico no tienen futuro, son víctimas anunciadas de su propio autoritarismo. En una decisión tan compleja como la que plantea este Proyecto no se puede actuar al margen del consenso político/social, máxime cuando contempla inversiones billonarias, a ocho años vista, que hipotecan a gobiernos venideros.

El agua mueve en España cantidades ingentes de dinero público y privado, privilegios y concesiones. Abre inmensas expectativas de negocios privados y es baza importante de los juegos del poder político, con sus pactos e intrigas. Un poder que, en este tema, da la impresión de actuar como brazo de un interés organizado superior.

A la vista de las políticas hidrológicas que vienen de la Unión Europea es fácil entender ahora la urgencia con la que el Gobierno del Partido Popular creó las Sociedades Estatales del Agua y reformó la Ley para permitir el mercado de los

derechos concesionales. Lo que estaba pendiente de ventilar era un auténtico Pelotazo Hidrológico Nacional, es decir, el actual proyecto. Al poder organizado que está detrás de todo esto le interesa más que haya confusión, ruido y un cierto nivel de desinformación organizados, en vez del saber ilustrado y el diálogo abierto. Interesa que el debate social esté dominado por el tópico, la visceralidad y el argumento fácil.

Soy uno de esos científicos a los que el Ministerio de Medio Ambiente solicitó un informe sobre este Proyecto de PHN. Ni siquiera el cónclave de la planificación, que es el Consejo Nacional del Agua, ha tenido acceso a esos informes. Ahí están, secuestrados por el proceder autoritario. Recientemente hemos podido comprobar que nuestras opiniones sobre este Plan son unánimemente negativas, y abrumadamente condenatorias. Denunciantes es la palabra.

La sociedad, la gente, es una inmensa fuente de sentido común en materia de grandes decisiones ... a condición de estar pluralmente informada. Pero en este debate del agua la desinformación, la manipulación y el tópico orquestado han imperado. Hace tiempo que la oposición política tendría que haber exigido la retirada inmediata de la gran campaña de publicidad oficial que está padeciendo el país sobre las bondades y milagros de este Plan, porque estamos ante una decisión de alto calado que pretende establecer un nuevo orden de valores del territorio con sus gentes y, a la vez, incrementar el nivel de privatización de un bien delicadamente estratégico (el agua), basándose en etéreas y artificiosas mayorías y en una sarta de tópicos, como el del desequilibrio hidrológico nacional y la solidaridad.

Desde la manifestación del 8 de Octubre en Zaragoza el Gobierno ha empleado cientos de millones de pesetas en páginas de publicidad. Decenas de miles de cuñas en radio y televisión nos han intoxicado con mensajes abusivos, convirtiendo en una operación de marketing lo que debería ser un debate ideológico argumentado. Se nos asegura que este PHN beneficia a todos y no perjudica a nadie; que está hecho con objetividad buscando el bien general y que ha sido elaborado desde la más exquisita sensibilidad medioambiental. De forma que quien se opone a él es porque busca su propio interés personal antes que "el bien general de España". ¡Pues no!

El problema de fondo es la intención irrenunciable del asalto hidrológico al Pirineo. Todo lo demás es secundario. El afán por privatizar los ríos aragoneses es obsesión recurrente del poder organizado y fuente de inspiración de todas políticas hidrológicas oficiales habidas desde 1940, que han sido y son políticas hidráulicas, es decir, de obras. Pero en este tema el enemigo está también en casa: el propio Pacto del Agua, que es la mano tendida a ese asalto, un paso más en el proceso de despatrimonialización y despersonalización de Aragón y por extensión de todo el país.

Las obras del Pirineo son la condición necesaria para que los enormes negocios y prebendas que posibilitan los trasvases del Ebro puedan un día ser realidad. El propio PHN así lo reconoce, de forma implícita naturalmente. De ahí la urgencia del ministro Matas en sacar adelante las presas pirenaicas, contra viento y marea, para lo que cuenta con el beneplácito de D. Marcelino Iglesias, presidente del Gobierno de Aragón, que no sabe muy bien lo que quiere, ni sabemos quién le asesora. Sin embargo, de ahí a acusarle de traidor e irresponsable por ir a Bruselas a exponer sus razones, va un abismo. Esa acusación sólo tiene dos lecturas posibles. O Aznar teme la

fuerza de los argumentos del Presidente Iglesias, o cree que la gente de Bruselas es una pandilla de ignorantes, que se deja convencer por el primer "antipatriota" que les llega.
